



JUZGADO VEINTISIETE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C. siete (07) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Rad. 110014003026**20230109201**

FALLO SEGUNDA INSTANCIA HABEAS CORPUS

Se decide la impugnación interpuesta por el accionante Jon Edilson Roa Patarroyo contra el fallo que en la acción de Hábeas Corpus de la referencia, profirió el Juzgado Veintiséis Civil Municipal de Bogotá el pasado veintisiete de octubre dos mil veintitrés. Siendo repartida el 02-11-23 a las 2:19 p.m.

ANTECEDENTES

Jon Edilson Roa Patarroyo, actuando en nombre propio, instauró acción de Hábeas Corpus por considerar que se ha prolongado ilegalmente su detención misma que se gestó con ocasión al proceso No 850016001169-2014-00115 mediante el cual se le condeno a 48 meses de prisión por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Yopal, indico que el Juzgado 2º de Ejecución de penas y medidas de seguridad de Yopal el 16-07-19 determino la libertad condicional por un periodo de 561 días. Afirma que en las datas del 9-02-21 y 11-05-21 solicito el cumplimiento de pena y que para el 10-06-22 el Juzgado 2º de EPMS de Yopal solicito las razones del incumplimiento de las obligaciones de libertad condicional y sin mediar la presunción de inocencia por cuenta del proceso 850016001173-2020-00017 se le imputo la comisión de los delitos de concierto para delinquir, secuestro extorsivo y porte ilegal de armas de fuego.

El accionante indica que para el 24-08-23 el Juzgado 1º Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Orocué ordeno la libertad por vencimiento de los términos como quiera que no se dicto sentencia en el proceso 850016000000-2020- 00041, que se asignó por ruptura procesal del 850016001173-2020- 00017, con el cual se ordenó la medida de aseguramiento. También informo que el 04-09-23 fue puesto en disposición del Juzgado 2º EPMS por la orden emitida el 05-09-22 que no fue notificada en debida forma.

Que, teniendo en cuenta lo anterior, considera que se está prolongando indebidamente su detención, por lo que, debe disponerse su libertad inmediata y la cancelación de la orden de detención antes referida.

La acción correspondió, por reparto, al Juzgado 26 C.M. de esta ciudad, el cual asumió su conocimiento, y ordenó el enteramiento a los Juzgados 2º EPMS, Juzgado 1º Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Orocué – Casanare, Juzgado 2º Ejecución de Penas y Medidas de

Seguridad de Yopal – Casanare y Juzgados 1º y 2º Penales del Circuito Especializado de Yopal, así como ofició a la Cárcel “La Picota”, para que rindiera un informe sobre lo acontecido con el accionante.

El Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, oportunamente, se pronunció sobre lo solicitado por el actor, señalando que en virtud de la sentencia del 19-02-18, proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Yopal, la cual se encuentra en firme, por lo que se encuentra cumpliendo la pena de 48 meses de prisión que le fue impuesta por los delitos de Rebelión Agravada, con Concierto para Delinquir Agravado con Fines Extorsivos y Terroristas.

Igualmente, informó que, efectivamente se le otorgó libertad condicional con auto del 16-07-19 en un período de prueba de 18 meses y 21 días cumplido el 12-02-21, que para el 11-05-22 el accionante solicitó la extinción de la pena por lo que se realizó la revisión de antecedentes encontrándose una medida de aseguramiento vigente por el proceso 850016001173202000017, y asimismo se encontró boleta de encarcelación librada por el Juzgado 2º penal Municipal de Yopal que se materializó el 20-11-20.

Relato que fue revocada la libertad condicional al accionante, como quiera que se acreditó el incumplimiento de las obligaciones del Art 65 del C.P. puesto que la orden de captura antes indicada se debía a la comisión de nuevos hechos estando dentro del período de prueba, por lo que debía cumplir el restante de la pena intramuralmente y cumplida la pena del proceso debería quedar a disposición de dicho despacho.

Informo que por ser trasladado el sentenciado al centro carcelario de la Picota el proceso fue trasladado virtualmente para que fuese repartido entre los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, por lo que ya no conserva competencia dentro del proceso penal adelantado contra el accionante.

Por lo anterior, considera que no existe privación injusta de la libertad, pues, actualmente, el actor se encuentra purgando la pena que le fue impuesta en la sentencia del 19-02-18.

Finalmente, reitera que el accionante ha iniciado 3 acciones similares a la descrita en la referencia, las cuales, oportunamente, fueron denegadas, por lo que, estima que su actuar es temerario.

El Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Yopal indicó que avocó conocimiento del proceso el día 25 de octubre de 2022, informó que actualmente el accionante Jon Edilson Roa no se encuentra privado de la libertad a cargo de ese despacho judicial y que el proceso que curso en el juzgado se encuentra en etapa de juicio oral, en el cual se tenía programada continuación de audiencia de juicio oral para el 27-10-23. También informa que el Juzgado Promiscuo Municipal de Orocué de Casanare con Función de

Control de Garantías, para la data del día 09-08-23, negó libertad por vencimiento de términos dentro del radicado 850016000000202000041.

El Juzgado 1° Penal del Circuito Especializado de Yopal, informo que en ese despacho cursan 2 procesos contra el accionante, a saber Proceso identificado con el CUI No 8500160000002020-00029 y radicado interno No 2020-0023 dentro del cual mediante auto del 13 de octubre de 2022 se propuso colisión de competencia negativa, siendo remitido al Juzgado 2° Penal del Circuito Especializado de Yopal; y el Proceso identificado con el CUI No 8500160000002020-00041 y radicado interno No 2021-0002 dentro del cual el 10 de marzo de 2021 se adelantó audiencia de acusación y se ordenó su conexidad al proceso con CUI No 8500160000002020-00029 y radicado interno No 2020-0023.

El Juzgado Primero Promiscuo Municipal De Orocué, Casanare Con Función De Control de Garantías y Conocimiento indico que para el proceso No. 850016000000202000041 se le concedió la libertad por vencimiento de términos ordenándose la libertad. Y que por solicitud de la Fiscalía 11 de Bogotá se emitió copia del auto del 05-09-22 proferido por el Juzgado 2° EPMS con el cual se revocó la libertad condicional otorgada por proceso diferente al que se le otorgara la libertad por vencimiento de términos.

Seguidamente, el a quo negó la petición constitucional, señalando que la acción no era procedente, por cuanto, no existe la prolongación ilegal de la libertad que aduce el accionante, y que en todo caso se advierte que el señor Jon Edilson Roa Patarroyo se encuentra purgando el restante de la pena impuesta en la sentencia del 19-02-18 en razón de la revocatoria de la libertad condicional en otrora ocasión concedida, y en lo que respecta a la presunta indebida notificación de la orden de revocatoria del subrogado de libertad condicional debió ser alegado por los medios idóneos ante el juez natural y o ante el juez constitucional, además que lo relacionado con las peticiones de libertad deben elevarse ante el Juez de conocimiento mismo que se encuentra pendiente de la asignación del Juzgado de ejecución que vigile la condena en la ciudad de Bogotá.

Con tal decisión se mostró inconforme el accionante, por lo que interpuso la impugnación que se desata.

CONSIDERACIONES

El artículo 28 de la Carta Política erige la inviolabilidad de la libertad individual a la categoría de derecho fundamental, mas no con carácter absoluto, pues admite limitaciones o restricciones que se legitiman y justifican siempre que se deriven de la existencia de un mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con observancia de las formalidades establecidas en la ley y por un motivo señalado en forma previa en la misma.

Adicionalmente, con miras a la efectividad de dicho derecho y para evitar su reducción a un simple enunciado teórico despojado de la realidad, el constituyente también concibió el Hábeas Corpus como un mecanismo de protección de la libertad individual.

Se tiene, entonces, que el Hábeas Corpus, como instituto tutelar de la libertad individual, resulta viable tan solo frente a los ataques e intromisiones que comporten limitación arbitraria de tal derecho, específicamente, como un control externo al proceso penal, en beneficio de quien ha sido capturado con violación de las garantías constitucionales o legales, como también, en los eventos de prolongación ilegítima de la privación de la libertad.

Sin embargo, cuando una situación de tal entidad y alcance se produce en el curso de un proceso penal, que es lo esbozado en estas diligencias, el Hábeas Corpus se torna improcedente, porque el sindicado en tal acción dispone de los medios ordinarios de defensa contemplados en el ordenamiento jurídico, de ejercicio privativo al interior del mismo.

En efecto, así lo ha enseñado los máximos órganos rectores, como la H. Corte Constitucional y la H. Corte Suprema de Justicia – Sala Penal, indicando lo siguiente:

"(...) 20. La segunda hipótesis - que es precisamente la que nutre el precepto acusado - está dada por la privación de la libertad ordenada por la autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona afectada con la medida puede cuestionar su legalidad, tanto en el momento inicial cuando ella se emite como posteriormente al advertir su indebida prolongación. El demandante sostiene que esta controversia puede articularse a través de la acción de habeas corpus y ante cualquier autoridad judicial.

La Corte advierte que la tesis del demandante tendría pleno asidero si a través del proceso y apelando a los recursos y acciones ordinarios previstos en la legislación, no fuere posible controvertir las órdenes de privación de la libertad dispuestas por la autoridad judicial respectiva y si, adicionalmente, estas acciones y recursos no pudieren ser resueltos de manera imparcial. Para desechar esta alternativa, basta observar que, en el Código de Procedimiento Penal frente a cada decisión judicial de privación judicial de la libertad, puede plantearse un recurso cuya resolución se confía a la autoridad judicial superior....

"En realidad, la hipótesis ahora analizada coincide exactamente con el espacio de protección de la persona que la Constitución asigna al debido proceso. Ciertamente, la privación judicial de la libertad puede adolecer de vicios de forma y fondo o surgir estos más tarde como consecuencia de su indebida prolongación. De no contemplar la ley remedios específicos que signifiquen la efectiva interdicción a la arbitrariedad judicial, proyectada en un campo tan sensible a la personalidad humana como es la libertad, se patentizaría una abierta violación al debido proceso, garantía que debe presidir todas las fases e incidencias de la investigación y juzgamiento de los hechos punibles. A este

respecto la Corte reitera que el C. de P.P. abunda en instrumentos de revisión y control de las providencias judiciales limitativas de la libertad.

"...El derecho de acceso a la justicia, fin inmediato de la acción de habeas corpus, se logra a través de la interposición de los recursos contemplados en la legislación y que, en últimas, corresponden al desarrollo normativo del debido proceso. El derecho de acceso a la justicia (C.P. art. 229) y el derecho al debido proceso (C.P. art. 28), no pueden desconocer los principios básicos sobre los cuales se estructura la organización judicial y la actividad que desarrollan los jueces. Dichos principios que se predicen por igual del órgano como del proceso, permiten precisamente que la rama judicial sea en el marco constitucional la garante de los derechos fundamentales. La organización de las diferentes jurisdicciones, las reglas de competencia, la consagración de instancias y de recursos, le imprimen a la actuación judicial unos caracteres de independencia y de autocontrol interno que no deben pretermitirse a riesgo de perjudicar la correcta administración de justicia. El derecho de acceso a la justicia tiene como presupuesto necesario la existencia de un aparato de justicia y de unos procedimientos articulados en función del trámite y resolución de las peticiones que se formulan al órgano y que sin ellos no sería posible resolver adecuada y ordenadamente. No cabe duda que la opción de mantener dos vías paralelas para controvertir las privaciones judiciales de la libertad – habeas corpus y recursos dentro del proceso - desquicia inútilmente la función judicial y entraña un doble ejercicio del aparato judicial, desconociendo la existencia de recursos cuya utilización resulta más racional, inclusive desde el punto de vista de la capacidad de acierto habida consideración del mayor conocimiento que los jueces competentes pueden tener del proceso y de las circunstancias que lo rodean..."¹.

(..) "Con todo, a pesar de que se acepte que el hábeas corpus en la Ley 1095 de 2006 tenga tales características que acaso no ostentara en legislaciones anteriores, el aserto ya expresado según el cual no es una acción que sustituya a los procesos penales legalmente establecidos no puede en manera alguna soslayarse a riesgo de conculcar caros principios al Estado de derecho como el de legalidad, el del debido proceso, o el del juez natural. En esa medida — se reitera— sin que haya de existir norma que así lo exprese y atendida la naturaleza excepcional y especial que sin duda ostenta el hábeas corpus en tanto su ejercicio lo es exclusivamente para el derecho a la libertad personal y otros que íntimamente le acompañan y solo en cuanto aquel se vulnere por infracción de las normas dispuestas para afectarlo legítimamente, la acción constitucional no puede tener un alcance y una ilimitación tales que desnaturalicen el esquema señalado por el legislador para el trámite de los procesos.

"En ese orden el hábeas corpus no se constituye en medio a través del que se pueda sustituir al funcionario judicial penal que conozca de determinado proceso en relación con el cual se demande el amparo de la libertad; por eso al juez de hábeas corpus no le es dado inmiscuirse en los extremos que son esenciales del proceso penal, no le es posible por ello cuestionar los elementos del punible, ni la responsabilidad de los procesados, ni la validez o valor de

¹ Corte Constitucional Sentencia C-301/93

persuasión de los medios de convicción, ni la labor que a ese respecto desarrolle el funcionario judicial. En otros términos —y como lo indicara el a quo con apoyo en doctrina y jurisprudencia de la Corte— el ejercicio del hábeas corpus solo permite el examen de los elementos extrínsecos de la medida que afecta la libertad, no la de los intrínsecos porque estos son del ámbito exclusivo y excluyente del juez natural².

En consecuencia, cuando media para la privación de la libertad una providencia judicial emitida por la autoridad que adelanta la actuación respectiva, quien afirma ser afectado con ella debe activar los medios defensivos previstos en el ordenamiento procesal.

Si ello es así, como en efecto lo es, y toda vez que el Juzgado 2° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, así como el Juzgador de primera instancia, y como también se puede verificar del histórico de actuaciones adelantadas por los Juzgados Penales, se puede extraer que el señor Jon Edilson Roa Patarroyo se encuentra privado de la libertad por orden de un Juez de la República, quien, mediante sentencia del 19 de febrero de 2018, lo condenó a la pena de 48 meses de prisión y una multa de 475 SMLMV, que se le concediera respecto de dicha condena el subrogado de libertad condicional con periodo de prueba por auto del 16-07-19, mismo que fuere revocado mediante auto del 05-09-22 y se dispuso el cumplimiento del restante de la condena de forma intra mural, es decir, 18 meses y 21 días, así pues resulta forzoso colegir, entonces, que la temática alegada a través de la presente acción constitucional alude a cuestiones que sólo competen al juez o funcionario encargado del proceso seguido en su contra que, por tanto, deben decidirse por tal autoridad judicial, y cualquier inconformidad que tenga frente a la ejecución de dicha pena, deberá ponerla en conocimiento del Juez correspondiente, dado que la acción de habeas corpus no fue consagrada para permitir procesos alternativos o sustitutivos de los contemplados en la legislación ordinaria quedando excluido, entonces, el ejercicio de la acción de hábeas corpus para estos fines.

En efecto, las peticiones que, mediante la presente acción, presenta el actor, deben formularse, debatirse y decidirse dentro del respectivo proceso penal, el que es el escenario diseñado por el legislador para el efecto. En otros términos, la procedencia de la acción de Hábeas Corpus está sujeta, en principio, a que el afectado no disponga de otros medios judiciales, desde luego que no es un medio más de que disponen las personas para reclamar derechos o para plantear controversias que tienen las vías o los cauces ordinarios ante el juez natural para ser debatidos.

En este orden de ideas, concluye el Despacho, que la acción de que se trata está llamada al fracaso, sin que sea necesaria la práctica de la entrevista a que alude el inciso 2° del artículo 5° de la Ley 1095 de 2006, en la medida

² Auto Nov27/06 Radicado 26503

que resulta innecesaria según se desprende de las probanzas obrantes en el expediente.

Por todo lo anterior se confirmará, por tanto, la decisión impugnada.

DECISIÓN

Por mérito de lo expuesto, el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

RESUELVE:

PRIMERO. Confirmar el fallo que, en la acción de Hábeas Corpus de la referencia, profirió el Juzgado Veintiséis Civil Municipal de Bogotá D.C., el veintisiete de octubre de dos mil veintitrés.

SEGUNDO. Comuníquese, inmediatamente, esta determinación al accionante, y a los demás intervinientes en esta actuación.

COPIESE, NOTIFIQUESE y CUMPLASE

Siete de noviembre de 2023, Hora 08:00 a.m.

La Juez,

MARIA EUGENIA FAJARDO CASALLAS.

npri

Firmado Por:
Maria Eugenia Fajardo Casallas
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 027 Escritural
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2871809a3dfc17550cb2a209ed5e7cc3593a609803d10085571a6a9746a6840d**
Documento generado en 07/11/2023 08:05:07 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>